

## **Malestar, acción colectiva y movimientos sociales en Chile (2001-2017)**

*Disability, collective action and social movements in Chile (2001-2017)*

**Francisco Iván Sotomayor López**

Escuela de Trabajo Social  
Universidad de Valparaíso, Chile  
francisco.sotomayor@uv.cl

**Recibido:** 25/01/2018

**Aceptado:** 24/05/2018

### **Formato de citación:**

Sotomayor López, F.I. (2019). "Malestar, acción colectiva y movimientos sociales en Chile (2001-2017)". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 80, 44-60, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sotomayor.pdf>

### **Resumen**

Objetivo: reflexionar críticamente sobre los profundos cambios a nivel de los discursos políticos dominantes presentes en las primeras décadas de este siglo en Chile, lo que ha permitido disputar ciertas hegemonías históricas. Metodología: estudio descriptivo de carácter teórico y reflexivo, con la revisión previa de la literatura sobre los movimientos sociales, colectivos y acciones de protesta. Resultados: Se concluye que la incapacidad de las élites políticas para moderar los daños producidos por la ortodoxia neoliberal ha permitido el aumento del malestar, generado las condiciones de posibilidad para nuevas movilizaciones sociales y acciones de protesta, esta vez protagonizada por una nueva clase media, surgida del consumo, más educada, lo ha favorecido la diversificación de esta nueva agenda movilizadora.

### **Palabras clave**

Chile, malestar, acción colectiva, movimientos sociales, sociedad de mercado.

### **Abstract**

Objective: to reflect critically on the profound changes at the level of the dominant political discourses present in the first decades of this century in Chile, which has made it possible to dispute certain historical hegemonies. Methodology: descriptive study of a theoretical and reflective nature, with the previous review of the literature on social movements, collective and protest actions. Results: It is concluded that the incapacity of the political elites to moderate the damages produced by the neoliberal orthodoxy has

allowed the increase of the malaise, generated the conditions of possibility for new social mobilizations and actions of protest, this time starring a new middle class , emerged from consumption, more educated, has been favored by the diversification of this new mobilizing agenda.

### **Keywords**

Chile, upsetting, collective action, social movements, market society.

## **1. Introducción**

Tal como refiere Calderón (2008), “varios de los regímenes democráticos más consolidados de América Latina están pasando por procesos de inflexión sociopolítica suave” (2008: 133). Dentro de estos procesos de cambio se encuentra Chile. Un elemento que se repite dentro de la discusión política chilena desde hace varios años es la denominada “crisis de legitimidad”. En esta línea, las movilizaciones del año 2011 hasta la fecha constituyen este punto de inflexión, evidenciando una fuerte desafección de la sociedad civil con la clase política, cristalizándose como hecho social y político a partir de situaciones como la bajísima participación general en elecciones, especialmente juvenil.

Una de las derivadas de esta supuesta crisis, y el tema central de este artículo, es el resurgimiento de los movimientos sociales como actores políticos relevantes, los que, desde un relato renovado, han logrado al menos evidenciar un malestar profundo respecto del actual régimen político y social, que tiene como telón de fondo una crítica basal al modelo de economía de mercado y su enorme influencia en las interacciones que sostienen la sociedad chilena.

Desde varios años, probablemente entre mediados de los 90 hasta inicios de los 2000, el debate desde la sociología sobre la realidad chilena giraba sobre una crítica difusa, una construcción abstracta respecto del malestar hacia un sistema y la mercantilización exacerbada de la sociedad chilena, que ha tendido a la desintegración social (Fleet, 2011). No estaba claro quiénes serían los actores sociales que transformarían esta crítica a un proyecto alternativo de sociedad. En ese contexto, fue el movimiento estudiantil quien tomó la responsabilidad de la construcción de un relato crítico que también ha derivado en incipientes formulaciones de un proyecto de sociedad.

Para Salazar (2012), el movimiento estudiantil se constituye como una expresión de movimientos sociales ciudadanos, los que en su fase madura se caracterizan por su práctica de autogestión, o sea la generación de medios para sostener el movimiento y satisfacer sus fines (si es que logran ser interpretados de acuerdo con una construcción teleológica de acción colectiva). Según el historiador, estos movimientos sociales vendrían a ocupar el lugar que alguna vez tuvieron los movimientos democráticos y de derechos humanos durante la dictadura junto con el movimiento obrero durante buena parte del siglo XX, es decir, se constituirían en una expresión nueva de una vieja trayectoria que subterráneamente ha dado vida al conflicto central de la sociedad chilena. Este nuevo surgimiento de movimientos ciudadanos podría dar cuenta por tercera vez en dos largos siglos de una reactivación del espacio comunitario como forma de construcción de una cultura nueva, una proveniente del sujeto y no del objeto. En tal sentido, la región latinoamericana experimenta una notable fragmentación de sus conflictos asociada con una multiplicación de actores de distinto tipo, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, homosexuales, entre otros/as.

Por “malestar” se entenderá un sentimiento de incomodidad con algún aspecto del mundo, una definición que abarca la insatisfacción con la situación económica personal o la desconfianza en las autoridades políticas a través de la percepción de abuso por un actor poderoso (Cerdeira Gutierrez & Diaz Ricchini, 1988). Asimismo, por protesta colectiva, me referiré a cualquier acción entre dos o más personas en un ambiente público que intenta afectar al mundo social, ya sea cambiando o conservando algún aspecto de él, a través de tácticas “no institucionales” que pueden ir desde la firma de una petición a marchar en la calle, bloquear carreteras u ocupar edificios privados o públicos (Meyers, 2007). Finalmente, para comprender los movimientos sociales se utilizará la definición de Tilly (1991), quien define movimiento social como “el desafío sostenido de un grupo social a quienes detentan el poder mediante repetidas manifestaciones públicas de su número de simpatizantes, su nivel de compromiso, unidad y valor” (1991: 7).

Siguiendo a Dieter Rutch en Ventura (2007), un movimiento social estaría conformado por dos elementos: por un lado, redes de grupos y organizaciones preparados para la movilización y actos de protesta para promover o resistir el cambio social, objetivo último de los movimientos sociales; y por otro, individuos que asisten a actos de protesta o contribuyen con recursos sin ser necesariamente parte de un grupo u organización del movimiento. En palabras de Wahren (2012), refiriéndose a la dimensión territorial de los movimientos sociales, “son procesos que dan cuenta en lo cotidiano de estos nuevos mundos que se proponen construir” (2012: 5).

Las relaciones entre el malestar, movimientos sociales y la protesta son un tema clásico en la literatura especializada. Desde el siglo XIX y al menos hasta la década de los setenta, varios autores instalaron la idea que la movilización social respondía fundamentalmente al descontento generalizado y eran consecuencia de “tensiones sociales” o “descomposición social”, incorporando en este análisis una amplia gama de fenómenos macrosociales, tales como la industrialización, la guerra, la migración, crisis y competencia étnica (McAdam, 2010).

Las teorías absolutas y relativas de la privación, desde Marx a Tocqueville, resultaban de gran influencia en ese momento, considerando que las personas protestan cuando se sienten insatisfechas con su condición social o con las condiciones materiales, ya sea en términos absolutos o en relación con otros grupos (Ventura, 2007). En la década de los 70, comienzan a aparecer voces que indican que el descontento social era menos importante de lo que se suponía y que los recursos y las oportunidades constituían los principales factores explicativos de la acción colectiva. Ya en los 80, comienza a hablarse de marcos de acción colectiva capaces de reinterpretar los problemas individuales y transformarlos en colectivos, construyendo un actor social y político identificable, y a su vez proponer soluciones o alternativas (Somma, 2015). En los años 90, autores como Goodwin, Jasper y Polletta (2000) complementaron estos estudios introduciendo el componente emocional como elemento crucial en el desencadenamiento directo de la acción.

Para acercarme a la situación de los movimientos sociales en Chile, utilizaré algunos de los elementos relacionados con el papel del descontento en la protesta colectiva, que involucran a la economía política mercados e instituciones políticas que están generando este malestar. Siguiendo a Joignant (2012) en relación con la particularidad del “momento constituyente” que vive Chile los últimos años, este documento buscará reflexionar en torno a dos ideas centrales:

- La actividad colectiva de protesta y movimiento social en Chile es alimentada por un tipo específico de descontento que se deriva de la combinación de una

población agraviada por la sociedad de mercado sumado a instituciones políticas incapaces de incorporar grupos dispuestos a reformar las estructuras del mismo mercado.

- Aunque los movimientos sociales y las protestas colectivas requieren cierto grado de descontento para prosperar, durante los últimos años, producto de fenómenos globalizantes, se han diversificado los tipos de descontento en Chile, no todos los cuales son relevantes para desencadenar la protesta, aun así, se lograron articular relatos capaces de condensar el malestar y dotarlo de un objetivo más concreto.

## 2. Sociedad de mercado y descontento social

Según Salazar (2012), parte importante del descontento que ha alimentado la acción colectiva en Chile los últimos años se relaciona con el funcionamiento de los mercados. Cabe recordar que Chile tenía una matriz “centrada en el Estado” hasta los años 70, momento en el cual la dictadura cívico-militar comienza un proyecto de transformación económica revolucionaria liberal (Cavarozzi, 1991), intelectualizado por figuras como Jaime Guzmán que en muchos aspectos se ha mantenido hasta nuestros días.

Durante este período se realizaron profundas reformas en educación, salud, seguridad social, telecomunicaciones, agua, etc., transfiriéndose responsabilidades en la provisión de bienestar de la población, desde el Estado a empresas privadas nacionales o extranjeras (Garretón, 2010). Es importante destacar que, a diferencia de otros casos latinoamericanos –Uruguay o Argentina, por ejemplo– en los que se produjeron simultáneamente la restauración democrática y las reformas económicas, el proceso de instalación de la sociedad de mercado chilena se inició y cristalizó en un contexto autoritario, impidiendo en parte que sus enormes costos sociales tuvieran una contraparte política. En otras palabras y tal como menciona Escobar (2010: 112), “en Chile la instalación ortodoxa del modelo de mercado fue un asunto del Estado, muchas veces en unión con las ONG que llevaron a cabo la tarea de la reconversión cultural de grupos populares a individuos económicamente mentalizados predicados por el modelo”.

Calderón (2008) entrega una tipología basada en las características políticas predominantes en la región, en donde es posible ubicar a Chile en la categoría que él denomina de “reformismo práctico”, entendido como una suerte de renovación y recreación del sistema de partidos signado por bloques o alianzas relativamente estables en el tiempo, así como un progresivo aumento del orden laico, búsqueda en el Estado de una gestión institucional que combine crecimiento económico con políticas de inclusión o solidaridad más o menos focalizadas. Asimismo, este tipo de países presenta una relación pragmática con Estados Unidos, que en este caso podría incluso hablarse de facilitadora y colaboradora especialmente en lo que a libre mercado se refiere. Basta recordar que Chile fue el segundo país latinoamericano después de México en tener el un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el que entró en vigencia el 1 de enero de 2004 y que significó apresurar un proceso de apertura que en la actualidad hace de Chile uno de los países con mayor cantidad de acuerdos comerciales internacionales vigentes, un total de 21 con más de 50 países (DIRECON, 2018).

En esta misma línea, si una sociedad de mercado es aquella en la que la mayoría de las personas deben pagar de sus propios bolsillos bienes y servicios que requieren para satisfacer la mayoría de sus necesidades (Somma, 2015), Chile, como la mayoría de los países occidentales, ciertamente califica como tal. Veamos algunos datos al respecto.

Para la consecución de alimentos, ropa, electrodomésticos, viajes, ocio y otros servicios, tal como en otras sociedades de mercado, los chilenos deben utilizar un suministro denso y creciente de tiendas minoristas privadas, supermercados, restaurantes, bares, agencias de viajes y centros comerciales.

Igualmente, aun cuando existe una red de escuelas estatales gratuitas, cada vez más familias envían a sus hijos a escuelas privadas por las cuales tienen que pagar, ya sea escuelas privadas parcialmente subvencionadas por el Estado o “particulares pagadas”, totalmente privadas. Chile es por lejos dentro de la región el país con menor oferta estatal en materia de educación, con un 38%, cuando el promedio internacional es de 82% (OCDE, 2012). A esto se le deben sumar los efectos nocivos en materia de segregación social, según el centro de investigación avanzada de la Universidad de Chile, “las familias eligen establecimientos particulares subvencionados principalmente por temor a un conjunto de peligros que asocian con las escuelas y liceos municipales; y lo hacen fundamentalmente buscando orden y seguridad para sus hijos” (Bellei *et al.*, 2015: 34). En cuanto a la educación superior, los aranceles cobrados por las universidades son uno de los más altos del mundo, presentando el segundo arancel más alto en el caso de las universidades públicas, con US\$ 7.654 anuales, el que es sólo superado por las universidades públicas de Estados Unidos, donde éste llega a US\$ 8.202 (OCDE, 2012).

Para el caso del transporte y comunicaciones, los chilenos compran el servicio a empresas privadas, tal como por los servicios básicos (agua, electricidad y gas). Para las pensiones la mayor parte de la población, con la notable excepción de los miembros de las fuerzas armadas, dependen de la capacidad de rentabilizar de las empresas privadas denominadas administradoras de fondos de pensión (AFP), que retienen y administran parte de sus salarios.

La situación en materia de salud es no es muy diferente. Mediante un descuento obligatorio de cerca del 7% los chilenos tienen dos supuestas alternativas de cobertura, una pública, en donde se encuentra la mayoría de las personas denominado Fondo Nacional de Salud (FONASA), el cual ha sido evaluado por distintas entidades nacionales e internacionales como deficiente, con pocos recursos en relación con la demanda y mala gestión. Por otro lado, una provisión privada, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), generadoras al año de utilidades gigantescas del orden de \$62.441 millones de pesos (unos 102 millones de dólares) (*El Mercurio*, 2018). Estos planes presentan graves inequidades tanto en su acceso como en sus costos, por ejemplo, en el caso de las mujeres en edad fértil, quienes deben pagar un sobrecargo en ocasiones del 300% producto del “riesgo” de quedar embarazadas. Según estudios realizados por el propio ministerio de salud, un 42% de sus usuarios de ISAPRE se siente “desprotegidos” por los elevados precios, mientras que en el sistema público un 29% se siente con poco resguardo por las excesivas demoras para acceder a una prestación (MINSAL, 2015).

En el caso de la vivienda, el Estado proporciona subsidios tanto a los sectores medios como a los más vulnerables que a pesar de haber aumentado durante los últimos años no está siquiera cerca de hacerse cargo de la brecha habitacional del país. Según datos de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, existen 660 asentamientos informales en Chile, llamados “campamentos”, que albergan a casi 38.770 familias o unas 116.000 personas. Estos asentamientos humanos precarios están presentes en la mayor parte de las grandes ciudades y el número de familias que allí viven, ha crecido en un 41% desde el año 2011 a la fecha. Lo anterior se proyecta agravará consecuencia del aumento explosivo de la inmigración durante la última década en el país (Hidalgo Dattwyler, 2007).

En síntesis, los chilenos dependen casi exclusivamente del mercado para satisfacer la mayoría de sus necesidades diarias, lo cual se encuentra presente en prácticamente la totalidad de las experiencias subjetivas cotidianas. Como cualquier país capitalista, el mercado chileno crea descontento, haciéndolo en al menos cuatro maneras, según plantea Borzutzky (en Gonnet, 2008).

En primer lugar, los mercados crean descontento cuando los bienes o servicios que proporcionan son demasiado caros. La expresión más visible de la acción colectiva impulsada por los costosos mercados en Chile se relaciona con la educación y las protestas estudiantiles. En relación con los ingresos de las personas, Chile tiene uno de los sistemas de educación superior más caros del mundo. Muchos estudiantes chilenos se encuentran endeudados con la banca privada o con el mismo Estado. De hecho, hay casos en donde el estudiante debe abandonar la carrera, pero todavía mantener la deuda, con el riesgo de aparecer en el registro de morosos afectando la obtención de nuevos préstamos. Todo esto crea incomodidad e incertidumbre que, aunque no haga que la persona esté lista para la acción colectiva, proporciona un terreno potencialmente fértil para ello.

En segundo lugar, los mercados también pueden crear descontento cuando proporcionan bienes y servicios de baja calidad. La educación nuevamente sirve de ejemplo. Al menos una parte de la protesta se relaciona con que muchas instituciones ofrecen educación de baja calidad, entregando perspectivas de contratación inciertas, generando un segmento de desempleados o “cesantes ilustrados”. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hace justo cuatro años los profesionales universitarios cesantes llegaban a las 76.120 personas (en el trimestre julio-septiembre de 2013), el último boletín para igual período del año 2016 año indica que la cifra llegó a las 122.550 personas, lo que representa un alza de 61% (INE, 2017).

Este escenario de precariedad genera casos particularmente dramáticos, como el que se conoció en 2012: seis recién nacidos murieron consecuencia de la venta no regulada de un suplemento nutricional que falseó datos sobre sus componentes. Posteriormente se supo que la compañía tenía conocimiento del ingrediente faltante pero no retiró el producto del mercado. Tras una investigación de más de dos años, los ejecutivos responsables del envenenamiento de los bebés recibieron solo cuatro años de libertad vigilada, fallo que fue criticado incluso por el ministro de salud de la época como “poco ejemplificador” (Maldonado, 2012).

En tercer lugar, los mercados generan descontento cuando gerentes y propietarios de empresas se involucran en prácticas percibidas como poco éticas o ilegales. Es interesante que una de las mechas que inició el movimiento estudiantil del 2011 fue la revelación de que las universidades no sólo cobraban altos cargos, sino también obtenían millonarias ganancias a costa de los estudiantes que se endeudaban hasta por treinta años. En el ámbito del comercio, una cadena de tiendas de retail “La Polar” renegoció de forma ilegal deudas de sus clientes sin su consentimiento, lo cual significó un aumento en las tasas de intereses de los deudores, quienes no se enteraban hasta que sus bienes eran embargados y/o puestos a remate (CIPER, 2012).

Lo anterior se enmarcada durante los últimos años en sonados casos de prácticas monopólicas y de colusión entre cadenas de farmacias (2008), productores avícolas (2011) y fabricantes de papel tisú (2015) (BioBioChile, 2017). Estos casos han hecho que en mediciones de transparencia internacional Chile haya descendido desde el lugar 22 al 24 en 2017 (Transparency International, 2017).

Otra fuente importante de descontento se halla en el mercado laboral. Con independencia del aumento relativo del ingreso de los trabajadores chilenos durante los últimos años, muchos siguen teniendo salarios precarios. Según datos de Fundación Sol

(2015), el 50% de los trabajadores recibe mensualmente un monto de \$270.000 pesos chilenos líquido, es decir uno 426,47 dólares y el 70% gana menos de \$390.000 al mes, equivalente a 584,42 dólares. A estos bajos salarios se suman inadecuadas condiciones de trabajo denunciados por entidades internacionales como la OIT y OCDE. Según el informe *Análisis de precariedad del Mercado del Trabajo*, realizado el año 2014, la precarización alcanza un 14,1%, destacando la subcontratación, no pago de cotizaciones sociales, inexistencia de contrato, acoso laboral, entre otros indicadores (Horizontal, 2014). A todo lo anterior, se suma la debilidad de las entidades de representación colectiva, tales sindicatos, federaciones de trabajadores o centrales únicas (CUT). Este tipo de organizaciones vienen sufriendo una fuerte caída entre sus participantes, al año 2017 sólo alrededor representa solo el 16,4% de la mano de obra (*El Mostrador*, 2017).

En cuarto lugar, los mercados pueden hacer que la gente no se sienta satisfecha no sólo como consumidores o trabajadores, sino también al ser excluida en las relaciones de mercado, con consecuencias dañinas en sus entornos sociales y naturales. Las convenientes condiciones que ofrece el marco regulatorio de Chile han atraído a empresas (muchas de ellas extranjeras) que han hecho inversiones millonarias en la explotación de los bosques, ríos, reservas minerales y reservas de peces del país. Como resultado, muchos chilenos –desde las comunidades mapuches del sur hasta las comunidades mineras del norte– han visto alteradas o destruidas sus fuentes de aire, agua y su entorno natural. La reacción de las empresas, intentado dividir las comunidades ofreciendo efectivo u otros beneficios materiales, genera aún más descontento.

Este último caso es referido por Calderón (2008) como una situación compartida en varios países de la región en donde se han dado durante los últimos años constantes demandas desde la ciudadanía al estado en torno a la profundización de espacios de participación, las que a diferentes velocidades deberían terminar con una mayor consolidación de las instituciones estatales. Temas como la rendición pública o *accountability*, así como la transparencia, la veracidad en la información pública, y los mecanismos de control ciudadano cada vez se esgrimen como mínimos en las demandas de parte de los actores de la sociedad civil, mostrando una saludable evolución respecto de las dinámicas clientelares tan arraigadas en la política latinoamericana.

Ahora bien, se podría decir que las tres primeras formas de descontento afectan a aquellos que interactúan directamente con los mercados –como los consumidores o los trabajadores que venden su trabajo por un salario–, pero el último se extiende más allá de estos grupos y se constituye en una forma de descontento que ha ido adquiriendo progresivamente más fuerza. El descontento no necesariamente se traduce en protesta, unas de las razones que explican esta “contención” es la intervención de determinados organismos (planes y programas sociales), que pueden prevenir o contener la protesta promulgando políticas que compensen esos daños y reducir el descontento y esto es ha sido solicitado por gran parte de la población chilena. Algunos autores han hablado de la “expansión de la institucionalidad democrática” relacionada con el progresivo aumento del control ciudadano sobre el poder público, bajo las banderas de integración social y equidad, pero que a la vez potencie la economía en el marco de la globalización (Calderón, 2008).

Sin embargo, desde 1990 a la fecha, la capacidad de contención de los gobiernos ha sido más bien limitado. Si bien es cierto que a nivel macro se han implementado iniciativas que representan importantes intentos de reducir la mercantilización y proporcionar bienestar y seguridad, tales como el plan de salud de AUGE, programas sociales como Chile Solidario, la reforma del sistema de pensiones de 2008 y la prolongación del permiso de maternidad de 2011 (Pribble y Huber, 2011), en muchas

áreas, el bienestar de los chilenos ha seguido dependiendo decisivamente del funcionamiento de los mercados.

### **3. De un malestar difuso a los relatos sistematizadores de la acción colectiva**

Para Chile, la década de 1990 fue una década inactiva en términos de movimientos sociales y acción colectiva. Los gobiernos de la Concertación de los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle dieron alta prioridad a evitar una inversión autoritaria. Creyendo que una mayor movilización social pondría en peligro la nueva democracia, se produce la ruptura de los vínculos políticos representativos entre estos gobiernos y la sociedad civil organizada (Garretón, 2010).

Esta ruptura, la acumulación del descontento asociado al mercado referido anteriormente en sus cuatro acepciones, y la incapacidad de las elites políticas para dar respuesta a las tensiones crecientes, generará las condiciones de posibilidad para la acción colectiva. Coincidente con lo referido por Calderón (2008) al momento de describir posibles escenarios en torno al manejo de tensiones sociedad civil-institucionalidad, se podría decir que Chile se encuentra en el escenario inercial, definido como “un divorcio entre lo social y lo institucional: solo se realizarían las reformas políticas y sociales indispensables para mantener una gobernabilidad económica mínima, y las capacidades de anticipación y gestión de conflictos serían irregulares (...)” (2008: 131). Este autor asigna un rol vital a las elites, quienes en el caso chileno desde inicios de siglo han ido presentando un débil liderazgo nacional. Todo esto terminaría por incidir negativamente en la baja confianza institucional presente en el país, y en la mayoría de los países latinoamericanos.

Como consecuencia, a partir de finales de los años 90, los movimientos sociales comenzaron a ser cada vez más centrales en Chile. Como hitos se pueden identificar la revitalización de la protesta mapuche en 1999, iniciada en el marco de tensiones históricas entre comunidades y empresas forestales, la respuesta del Estado fue tarde y dubitativa prevaleciendo las posiciones más duras especialmente desde el empresariado. La reacción fue la ocupación de más de un centenar de predios privados por parte de familias mapuches, sumado a la quema de edificios públicos e iglesias en las ciudades de Temuco y Osorno. El conflicto tuvo como principal novedad, desde el punto de vista del relato ideológico, la presencia de nuevos protagonistas, en su mayoría estudiantes universitarios y jóvenes profesionales mapuche. Estos nuevos actores rediseñaron con nuevos contenidos la acción de protesta que otros grupos del movimiento mapuche renunciaron hacia el término de la dictadura. En definitiva, se consolida un proyecto histórico donde la autonomía cobra un rol central hasta la fecha (Padilla, 2014).

El movimiento estudiantil tiene su primer *round* el año 2006, con el denominado “movimiento pingüino” de estudiantes secundarios. Fue la primera acción social masiva de protesta y de carácter nacional desde el retorno a la democracia. De ahí que estos estudiantes se autodeclararan “hijos e hijas de la democracia”, para relevar su pertenencia a una nueva generación que no vivió la dictadura y que defiende, sin temor su derecho al conflicto como mecanismo de transformación. La marcha de los pingüinos se constituye en un caso raro incluso para la tradición del movimiento estudiantil chileno, en el cual los actores centrales, los generadores de relatos, contenido y acciones fueron los secundarios. Se trató, asimismo, de una movilización de gran sentido político en un contexto en donde se afirmada por distintos sectores de la sociedad la indiferencia de los jóvenes a la política. Estamos, además, ante el primer movimiento del siglo XXI chileno, dada su estrategia de operar mediante sus nuevas tecnologías, que ha usado de forma masiva internet y sus redes sociales (García-Huidobro, 2009).



Como una consecuencia lógica, incluso demográfica, el año 2011 se producen las manifestaciones estudiantiles universitarias más grandes y masivas desde el retorno a la democracia, también llamadas “el invierno estudiantil chileno”. Aparecen nuevas organizaciones junto con la rearticulación de las antiguas. En un contexto de creciente (y relativa) prosperidad material y mejores niveles educativos, ciertos relatos y discursos logran movilizar recursos de poblaciones más interconectadas y de interés heterogéneos. En el caso particular de este movimiento, en su climax logra movilizar a más de medio millón de estudiantes a nivel nacional, entre protestas, acciones específicas y marchas, así como más de 600 establecimientos “tomados” en algunos casos por más de cuatro meses. Las consecuencias políticas directas fue el mejoramiento sustancial de los beneficios económicos a los estudiantes de educación superior, sin embargo, su principal impacto estuvo en el triunfo de la candidata presidencial que incorporaba prácticamente la totalidad de las demandas de los estudiantes en su programa.

Destacan en este punto dos movimientos particularmente visibles por sus formas de protesta. El primero es el protagonizado por la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA), caracterizado por sus intervenciones de alta significación pública denominadas “funas”, obteniendo altos niveles de espectacularidad en sus acciones, como interrumpir el Festival de la Canción de Viña del Mar, o protestar en botes frente a la casa de descanso de los presidentes. Esta estrategia tendría un componente de apropiación de modos y repertorios propios de actores juveniles durante la dictadura militar (Ruíz, 2012). Otro de los movimientos interesantes que surgen en este período es el Movimiento de Trabajadores Subcontratados, quienes entre los años 2004 y 2007 se constituyeron en una organización de amplia base social con un importante nivel de adhesión y repercusión pública, con éxitos de negociación relevantes en áreas estratégicas de la economía exportadora chilena tales como el cobre, empresas forestales, y empresas salmoneras. Lo relevante de este movimiento es que revitaliza un colectivo que había perdido dramáticamente su peso en la agenda pública como es el mundo obrero, demandando mejores condiciones para trabajadores subcontratados y precarizados (a través de empresas intermediarias) que venden esta mano de obra a grandes empresas públicas y privadas.

Este nuevo relato del movimiento social (McCarthy y Zald, 1977, en Somma, 2015) habría sido capaz de sintetizar, por un lado, el descontento con los mercados en ocasiones difuso, abstracto y sin un objetivo claro; y por otro, la incapacidad de las élites políticas, transformándola en demandas específicas que alimentarían las acciones de protesta. De esta forma, se comienzan a construir poderosos marcos de acción colectiva (Snow, 1980). Estos marcos enfatizaban cómo la aplicación ortodoxa del mercado como único ente regulador de las interacciones humanas genera un contexto fuertemente adverso y dañino para la población. Aparece como hecho político el sufrimiento silencioso de muchas personas, configurando un diagnóstico revelador de la gravedad de los problemas colectivos y lo más importante, definiendo pautas para la acción.

Al ya mencionado movimiento estudiantil se le sumarán las organizaciones ambientales, tanto a nivel de base como aquellas vinculadas a redes internacionales; diversas formas de resistencia mapuche han dado cuenta de cómo los proyectos de desarrollo estaban afectando su medio ambiente y estilos de vida sumado a la criminalización y represión por parte de agentes de la policía. También surgen organizaciones nuevas, como las creadas por personas afectadas por enfermedades crónicas, exigiendo la creación de un fondo nacional para compartir estos costos. En este mismo sentido, comienzan a problematizarse los bajísimos montos de las pensiones

(problema que se agudizará año a año en la medida que aumentan las personas que se jubilan), surgiendo movimientos como “NO+AFP”, quienes abiertamente exigen la eliminación de la capitalización individual, para algunos piedra angular del modelo económico chileno.

Por supuesto, no todas las protestas en Chile fueron alimentadas por daños del mercado. Por ejemplo, en el caso de organizaciones por la defensa de la diversidad sexual, pro y contra el aborto y organizaciones regionalistas, las demandas se ubican dentro de un marco más amplio, asociado a libertades civiles y reconocimiento como actor relevante en la toma de decisiones.

Los activistas difunden los marcos de acción colectiva a través de múltiples “contextos de micromobilización” (Snow, 1986), caracterizados por ocupar un lugar fuera de las organizaciones tradicionales, lo que es coherente con los estudios que confirman la escasa afiliación a organizaciones sociales o políticas, cifras que desde 1990 han ido disminuyendo de forma sistemática (Somma, 2015). Tal como en otros contextos de movilizaciones actuales, se han abierto nuevos espacios de articulación y comunicación mediante el uso de nuevas tecnologías como blogs, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea (Valenzuela y Arriagada, 2012; Millaleo y Velasco, 2012).

Un elemento transversal a estas nuevas formas de movilización es la cantidad de estudiantes de educación superior participantes. Al revisar las cifras, el número de estudiantes de educación superior en Chile aumentó cinco veces entre 1990 y 2015 y, actualmente, alrededor de 1,7 millones de jóvenes de 18 a 24 años están matriculados en la educación superior (OCDE, 2012). Más educación también significa mejores capacidades cognitivas para asimilar la información sobre el mundo social, hacer diagnósticos articulados y atribuir la culpa a todos los componentes esenciales de los marcos de acción colectiva. La sociedad de mercado chilena contribuyó a la protesta no sólo a través del malestar, sino también mediante la provisión de recursos tangibles e intangibles de movilización.

Sin embargo, aun cuando es apreciable un escenario aparentemente más proclive a la acción de movimientos sociales, ¿qué es lo que determina la participación o no de los chilenos? Ya se ha abordado la alta heterogeneidad del descontento en Chile, vinculado en su mayoría a los efectos negativos del mercado o a falta de reconocimiento como actor social legitimado. Siguiendo esta lógica, ¿qué ha permitido la emergencia de un relato colectivo movilizador? En definitiva, ¿existe un elemento común que ha permitido sintetizar este malestar?

Según una investigación realizada por el centro de estudios Mide-UC denominada *Participación política y descontento en Chile: Una tensión entre el interés en los temas políticos y la desafección generalizada*, del año 2016, las personas que están menos satisfechas con su situación económica, salud, familia y vida en general no protestan más y en comparación con otras familias chilenas no responden a este relato colectivo movilizador, por ende, la teoría de las privaciones no se cumpliría, debido a que las personas no pasan a la acción solamente por la percepción de insatisfacción con su situación personal. Esto es consistente con una importante literatura que sugiere que el malestar no juega un papel más importante que otros atributos a la hora de participar en la protesta (McAdam, 2010; Snow, 1980).

Entonces, ¿qué pasó el 2011?, ¿cómo se explica la emergencia de estas nuevas movilizaciones? Según Garretón (2010), un factor que favoreció la cristalización de un relato crítico fue que quien estuviera a cargo del gobierno fuera Sebastián Piñera. En este sentido la desaprobación al gobierno de derecha habría logrado marcar diferencias y “activar” la participación de grupos diversos. En este punto, los trabajos de Medel y

Somma (2016) refieren que el rechazo a un presidente se constituye en un blanco claro que puede ser identificado como causante de los problemas del país. Esto se aplica particularmente en Chile, en donde el presidente posee poderes muy amplios. Lo anterior, haría presumible que en la lista de las cuatro maneras que las sociedades de mercado generan malestar, los dos primeros se constituirían en formas latentes, que se pueden desatar en la medida que sean vehiculados por figuras como Piñera<sup>1</sup>, que en alguna medida representan muchos de los malestares con el mercado.

Según Salazar (2012), el primer gobierno de Sebastián Piñera habría jugado un rol relevante e impensadamente histórico, dado que su resistencia a cumplir las demandas de la mayoría de la ciudadanía habría enseñado –por oposición– justamente lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, las consecuencias para el historiado son que los movimientos progresivamente irán “recordando” la forma de co-construcción de su propia historia y cultura de abajo hacia arriba.

Otra de las posibles explicaciones que se pueden desprender de datos empíricos, por ejemplo, del Centro de Estudios Públicos (2017), refiere que aquellos que reportaron haber sido víctimas de abusos o conocer a otros que habían sufrido igual situación por personas o entidades más poderosas serían estadísticamente más propensos que otros a participar en protestas. El sondeo pregunta qué tanto “abusan del público” las instituciones. Las que lideran son las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con 80%; seguido por instituciones de salud previsional (ISAPRE), con 73%; instituciones financieras, con 68%; farmacias, un 62%, al igual que las clínicas.

Lo anterior cobra sentido al revisar las aportaciones de Jasper (1998), quien releva el rol de las emociones –en este caso negativas– derivadas de sentirse víctima de un abuso o ver a otros ser abusados, lo que exige colectivamente demostrar el descontento. Los movimientos sociales juegan un papel clave en la construcción de tales emociones y en la interpretación de ellas no sólo como a nivel personal, sino también como problemas colectivos que requieren por ende una acción colectiva. Los medios de comunicación también juegan un papel al informar las reivindicaciones y los discursos de los activistas y presentar imágenes impactantes que pasan a la acción.

En definitiva, no es simple insatisfacción económica o descontento político difuso lo que está detrás de las movilizaciones en Chile los últimos años, sino un proceso bastante más complejo, que requiere perspectiva histórica para ser comprendido, en donde intermedian elementos como el sentirse maltratado y no reconocido, la cristalización de un relato crítico sobre un político en particular o una empresa, sumado a la posibilidad de identificar que en otras personas también el diagnóstico; con la convicción que la acción colectiva puede proveer un cambio.

Asimismo, resulta relevante incluir elementos tales como el compromiso político y la membresía de la organización, los que, a juicio de Aguilera y Alvarez (2015), serían pistas que considerar para predecir potenciales acciones de protesta, así como el aumento de los niveles de politización y alcance de las demandas. Según estos autores, datos estadísticos actuales muestran que el aumento de tanto la conflictividad como de otros factores vinculados a ésta, tales como las alianzas entre distintos sectores representativos del malestar, y el correspondiente proceso de ampliación de los alcances de lo político como posibilidad de empujar transformaciones. Un elemento interesante sería la semantización de espacios específicos de disputa, como una suerte de punta de lanza para la consolidación institucional posterior.

---

<sup>1</sup> Sebastián Piñera es una de las personas más ricas de Chile con un patrimonio avaluado en más de 2,5 billones de dólares (Forbes, 2017), con varias tienen investigaciones abiertas vinculadas a uso de información privilegiada para enriquecerse, soborno, colusión y evasión de impuestos (CIPER, 2015a; 2015b; 2017).

En este punto cabe reflexionar en torno a los posibles escenarios en materia de movilización social que aparecen en el segundo período de Sebastián Piñera, quien en contra de los pronósticos de muchos logró alcanzar la presidencia con un insospechado 55,58% de los votos (3.795.280 en total), en diciembre del 2017. Las razones de su éxito aún están siendo analizadas y probablemente tendremos que esperar bastante para algún tipo de certeza en esta materia. Sin embargo, y siguiendo nuevamente a Jasper (1998) y su defensa de las razones emocionales en la movilización, el que llegue al poder nuevamente una figura que simboliza con tanta intensidad las razones del malestar es una razón para estar alerta frente a la posibilidad de rearticulación de distintos colectivos, especialmente en un escenario en donde los canales institucionales, llámese partidos políticos u otras organizaciones representativas históricas viven un momento cuando menos de desconcierto. Un hito interesante que puede que habrá que ver si se proyecta y consolida es la “Plataforma por los Derechos Sociales”, espacio de coordinación entre La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), la Confech, No+AFP, el Colegio de Profesores, Ukamau por las viviendas, ANDHA Chile y el Movimiento por el agua y los territorios. Al menos en un comienzo de esta nueva administración, las señales son contradictorias, especialmente resistido ha sido la designación del ministro de educación Gerardo Varela, quien representa a un sector ultraliberal en cuanto a la discusión de la educación en Chile y ha sido un reconocido opositor las políticas de expansión de derechos sociales en esta materia del gobierno anterior. De esta manera, el estado actual podría ser calificado como de “latencia”, y de predominancia de lo que Snow (1986) denominaba “micromobilización”, y que puede o no ser vehiculado por estas nuevas plataformas en la medida que coincidan en la articulación de un relato coherente que intermedien entre elementos de orden individual y colectivo.

#### 4. Conclusiones

Aunque el descontento siempre ha sido un excelente candidato para explicar la movilización social, décadas de investigación han demostrado que la relación no es simple ni mecánica. En Chile, el funcionamiento de los mercados y la incapacidad o falta de voluntad de las élites políticas para moderar los daños producidos por la ortodoxia neoliberal, han creado un malestar que en los últimos años ha sido evidenciable en movilizaciones, y diversas acciones de protesta que puede decirse que se inician con este nuevo siglo y que van *in crescendo*. El Chile del periodo que va desde 2001 a 2017 no se puede comprender sin sus movimientos sociales, ya constituidos en fenómenos fundamentales a la hora de elaborar y difundir marcos de acción colectiva que identifican responsabilidades sociales y, sobre todo, políticas. En su acción se evidencian las raíces estructurales de aquellos problemas percibidos en un comienzo como personales o privados, y van creando un sentido de eficacia que permite la articulación colectiva y la progresiva ampliación del nivel de politización. En la actualidad, defender la “educación gratuita y de calidad” en Santiago, Concepción o Valparaíso implica mucho más que una mera consigna, es un artefacto e hito cultural que entronca con movimientos enraizados de la historia popular nacional.

Las líneas de investigación sobre las movilizaciones sociales de los últimos años en el país abordan las cuatro maneras en que una sociedad de mercado puede generar malestar a la población: alto costo de los servicios, mala baja calidad de los mismos, prácticas deshonestas, poco éticas y/o abiertamente ilegales, y/o por ser excluida y no reconocida como un actor legítimo dentro en las relaciones de mercado. Las dos primeras parecen ser más bien latentes, y no se ha logrado establecer relaciones causales directas con la participación en la protesta. Sin embargo, en los últimos dos casos la

correlación aumenta y emerge como razón suficientemente poderosa para la articulación de un relato movilizador, especialmente si aparecen figuras que canalicen este malestar en un personaje y/o institución. Por ejemplo, la figura de Sebastián Piñera, las AFP, la Ley LOCE, mega-proyectos como el de Pascualama o la construcción de megacentrales hidroeléctricas o termoeléctricas, rellenos sanitarios y/o antenas de telecomunicaciones.

La dimensión económica en el análisis de la movilización social adquiere una importancia clave en el caso de Chile, donde el papel del mercado en la vida de los chilenos es, como se ha puesto de manifiesto, casi omnipresente. Es ilustrativa, en este sentido, la reciente campaña publicitaria del holding de administradoras de fondos de pensión (AFP), en donde se explicitaba que la vida estaba consagrada a la obtención de ese monto que permitiría vivir dignamente en la vejez<sup>2</sup>.

Por tanto, en una sociedad tan mercantilizada la movilización a menudo puede atribuirse directa e indirectamente a los efectos nocivos del mercado y la escasa regulación desde la institucionalidad política. Sin embargo, no es el caso de todos los movimientos. Las protestas regionalistas, por ejemplo, a menudo reaccionan a la concentración del poder político y administrativo en el gobierno central, una situación que es anterior a las reformas de mercado de los años 70 y puede remontarse a los orígenes de Chile como república independiente (Salazar, 2012). Asimismo, los movimientos por el respeto a la diversidad sexual reaccionan específicamente contra el conservadurismo cultural y la legislación obsoleta. Por su parte, aunque muchas movilizaciones mapuches tienen que ver con los daños del mercado, sus raíces se remontan a la época colonial. Es una tarea extremadamente compleja desentrañar cuánto “combustible” proviene de los mercados y cuánto proviene de otras fuentes.

Otro elemento a considerar en la relación entre mercado y movimientos sociales se refiere a la creación de una masa crítica de ciudadanos con capacidades para interactuar y oportunidades para protestar. Así, la expansión educativa significa más estudiantes que eventualmente pueden constituirse en una masa crítica que tensione los discursos y las narrativas hegemónicas durante los últimos años. Las habilidades cognitivas y la autoconfianza que obtienen después de años de estudio terminan favoreciendo a la construcción de relatos antagonistas que disputen esas verdades asumidas, las que paradójicamente identifican a la propia institucionalidad educativa –es el caso del movimiento social más exitoso de los últimos años en Chile– como uno de sus principales objetivos de transformación.

Esta circularidad de la protesta al interior de las sociedades de mercado merece probablemente mayor exploración. Calderón (2008) lo relaciona con la noción de frustración de expectativas en determinados colectivos, refiriendo que la consecución de niveles educativos más altos, sumados a la masificación de medios de comunicación y las tecnologías de la comunicación y la información, traen consigo a sociedades más cercanas y demandantes de consumo cultural, configurando un ciudadano más realista, crítico, escéptico, autónomo y defensor de sus libertades. Sin embargo, las condiciones materiales no logran en muchos casos responder a esta nueva subjetividad emergente. Los ciudadanos y ciudadanas no logran satisfacción con una oferta política que se asume como incierta –y en muchas ocasiones probadamente incumplida–, tampoco con el discurso tecnocrático vinculado a un siempre incompleto proceso de profundización de modernización capitalista. En definitiva, la brecha expectativas vs. realidad se constituye en una situación altamente frustrante en gran parte de la población, y es donde podemos encontrar algunas de las principales razones de la alta conflictividad y el malestar social.

---

<sup>2</sup> Sitio en donde se puede calcular el monto de pensión: <http://www.capitaltunumero.cl>

Este fenómeno entronca con los trabajos desarrollados por Pierson (1995), quien identifica en el propio Estado de Bienestar como uno de los factores favorecedores para la creación de circunscripciones políticas que dan forma a su futuro cuestionamiento. Lo mismo podría decirse de los actores políticos y las instituciones. Aunque las autoridades políticas son comúnmente culpadas de no reducir los daños del mercado e incluso de agravarlos, son estas mismas instituciones las que proporcionan las libertades civiles y espacios asociados que facilitan la movilización (Tarrow, 1994).

Por último, es evidente que el caso de Chile se enmarca en el contexto de otras sociedades altamente mercantilizadas, en las que muchos de sus ciudadanos dependen en gran medida de las lógicas del mercado para satisfacer gran parte, sino todas sus necesidades, esto lo podemos apreciar también en el resto de América Latina, con sus respectivas tensiones. Sin embargo, Chile posee algunos aspectos distintos de los que encontramos, por ejemplo en Argentina o Uruguay, dada la antigüedad de las reformas de mercado refundacionales que tuvieron lugar en el país durante los períodos 1978-1982 y 1985-1990, en respectivas fases de instalación y profundización, gozando de mucho más tiempo para consolidarse e instalarse tanto nivel económico-institucional como cultural (Garretón, 2010). Esta puede ser una razón por las cuales algunas de las fallas del mercado posean un papel tan importante en la motivación de la acción colectiva actualmente.

Siguiendo esta misma tesis, Romo (2017) refiere que a diferencias del resto de la región, la reacción y rechazo masivo a la ortodoxia de mercado se da cuando ya este modelo está totalmente enraizado en la cultura política y social del país. Basta recordar que el primer intento de acción de protesta con una consigna reformista más radical llega en el año 2008, más de dos décadas después de la adopción íntegra de las recetas del consenso de Washinton con demandas del tipo expansión y socialización del mercado crediticio, o la creación de un arancel diferenciado, sumado a la revisión de la prueba de selección universitaria por su totalmente probado sesgo de clases –incluso desde centros de estudio financiados por la derecha económica–, es decir, nada que pudiera si quiera considerarse como una avanzada anti-neoliberal. A diferencia de esto, otros movimientos estudiantiles de América Latina surgidos durante los últimos treinta años han logrado en mayor o menor medida problematizar la instalación de la lógica de mercado al interior de las aulas universitarias y levantar desde ahí relatos que disputan su noción hegemónica y totalizante. Un ejemplo de ello lo podemos observar en el movimiento estudiantil mexicano de 1999-2000 o el colombiano de 2011.

Durante el último gobierno de la alianza de centro izquierda (2014-2018), encabezada por Michell Bachelet se logra institucionalizar –no sin una enorme resistencia desde la derecha más dura– la noción de derecho detrás de la educación, lo que se traduce en la aprobación de la gratuidad para un porcentaje importante de los y las estudiantes más vulnerables del país, así como la implementación de dispositivos de ingreso a la educación que logren de alguna forma atenuar las desigualdades estructurales de uno de los sistemas educativos más segmentados del mundo (OCDE, 2012)

Finalmente, mientras que el movimiento obrero es todavía un actor importante en la organización de acciones colectivas en países como Argentina y Uruguay, en Chile el movimiento estudiantil y las organizaciones ambientales e indígenas tienen mayor protagonismo en la articulación de relatos efectivos sobre el malestar social.

## 5. Bibliografía

Aguilera, O., y Alvarez, J. (2015). “El ciclo de movilización Chile 2005-2012: Fundamentos y proyecciones de una politización”. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 5-32.

- Bellei, C., Canales, M., y Orellana, V. (2015). *El soporte cultural para el mercado educacional*, FONDECYT 1130430. Santiago de Chile: FONDECYT.
- BioBio Chile (28 de septiembre de 2017). Advierten que casos de corrupción afectan la competitividad de Chile. Santiago de Chile.
- Calderón, F. (2008). “Una inflexión histórica. Cambio político y situación socioinstitucional en América Latina”. *Revista de la CEPAL*, 121-133.
- Cavarozzi, M. (1991). “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina”. *Revista de Estudios Políticos*, 85-112.
- Centro de Estudios Horizontal (2014). Análisis de precariedad del mercado del trabajo, en <http://horizontalchile.cl/>
- Cordeira Gutierrez, I., y Diaz Ricchini, S. (1988). “El malestar social”. *Revista del Trabajo Social*, Universidad Complutense, 130-142.
- CIPER (2012). “La Polar I: La red de sociedades y millonarias ganancias que devela cómo los gerentes participaron del fraude”, 03/07/2012, disponible en <https://ciperchile.cl/2012/07/03/la-polar-i-la-red-de-sociedades-y-millonarias-ganancias-que-devela-como-los-gerentes-participaron-del-fraude/>
- CIPER (2015c). “Los flancos abiertos de Piñera en la investigación del financiamiento político”, 30/04/2015, disponible en <https://ciperchile.cl/2015/04/30/los-flancos-abiertos-de-pinera-en-la-investigacion-del-financiamiento-politico/>
- CIPER (2015b). “Donación de Piñera a RN se usó para pagarle un préstamo que él mismo hizo al partido”, 29/05/2015, disponible en <https://ciperchile.cl/2015/05/29/donacion-de-pinera-a-rn-se-uso-para-pagarle-un-prestamo-que-el-mismo-hizo-al-partido/>
- CIPER (2017). “Las zombis que usaron Penta, LAN y Falabella para tratar de eludir impuestos”, 27/03/2017, disponible en <https://ciperchile.cl/2017/03/27/las-zombis-que-usaron-penta-lan-y-falabella-para-tratar-de-eludir-impuestos/>
- DIRECON. (26 de abril de 2018). Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Obtenido de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales: <https://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/>
- El Mercurio (6 de marzo de 2018). “Utilidades de las isapres subieron 27% en 2017”. Santiago de Chile, Santiago, Chile.
- El Mostrador (8 de octubre de 2017). “Tasa de sindicalización bordea el 20% tras implementación de Reforma Laboral”, disponible en <http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/07/17/tasa-de-sindicalizacion-bordea-el-20-tras-implementacion-de-reforma-laboral/>
- Escobar, A. (2010). *Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global.
- Fleet, N. (2011). “Movimiento estudiantil y transformaciones sociales en Chile: una perspectiva sociológica”, *POLIS - Revista de la Universidad Bolivariana*, 99-116.
- García-Huidobro, J. E. (2009). ¿Qué nos dejó la movilización de los pingüinos? *Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación*, 12-31.
- Garretón, M. A. (2010). “La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales”. *Revista de ciencia política*, 115-148.
- Gonnet, M. (2008). *Mecanismos de democracia directa en Chile*. Santiago de Chile: Centre for Research on Direct Democracy.
- Goodwin, J., Jasper, J., y Polletta, F. (2000). “The return of the repressed: The fall and rise of emotions in social movement theory”. *Mobilization: An International Quarterly*, 5(1), 65-83.

- Hidalgo Dattwyler, R. (2007). “¿Se acabó el suelo en la gran ciudad?: Las nuevas periferias metropolitanas de la vivienda social en Santiago de Chile”. *EURE*, 33 (98), 57-75.
- INE. (2017). Empleo trimestral. Santiago de Chile.
- Jasper, J. M. (1998). “The emotions of protest: Affective and reactive emotions in and around social movements”. *Sociological Forum*, 13(3), 397-424.
- Joignant, A. (2012). “El reclamo de las elites: desencanto, desafección y malestar en Chile”. *Revista UDP*, 9, 103-105.
- Maldonado, E. (2012). El ADN de un acusado. *Que Pasa*.
- McAdam, D. (2010). *Political process and the development of black insurgency*. Chicago: University of Chicago Press.
- Medel, R., y Somma, N. (2016). “¿Marchas, ocupaciones o barricadas? Explorando los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile”. *Política y Gobierno*, 23(1), 165-201.
- Meyers, D. S. (2007). *The Politics of Protest: Social Movements in America*. New York: University Press.
- Millaleo, S., y Velasco, P. (2012). *Activismo digital en Chile*. Santiago de Chile: Fundación Democracia y Desarrollo.
- MINSAL. (2015). *Estudio de opinión a usuarios del sistema de salud, reforma y posicionamiento de la superintendencia de salud*. Santiago de Chile: Gobierno de Chile.
- OCDE. (2012). *Quality Assurance in Higher Education in Chile*. Review of National Policies for Education.
- Padilla, F. P. (2014). *Malon: la rebelión del movimiento mapuche, 1990-2013*. Temuco: Pehuén.
- Pierson, P. (1995). *Dismantling the welfare state? Reagan, Thatcher and the politics of retrenchment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pribble, J., y Huber, E. (2011). “Social Policy and Redistribution under Left Governments in Chile and Uruguay. En S. Levitsky, & K. Roberts”, *Latin America's Left Turn: Causes and Implications* (117-138). Baltimore:: Johns Hopkins University Press.
- Robert, B. R. (1975). *Center and Periphery in the Development Process: The Case of Peru*. Beverly Hills y London: Sage Publications.
- Romo, A. D. (25 de Septiembre de 2017). El movimiento estudiantil de 2011 legitima la disidencia en Chile.
- Ruíz, O. A. (2012). “Repertorios y ciclos de movilización juvenil en Chile (2000-2012)”. *Revista Internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, 57, 101-108.
- Salazar, G. (2012). *Movimientos Sociales en Chile*. Santiago de Chile: Uqbar.
- Snow, D. A. (1980). “Social networks and social movements: A microstructural approach to differential recruitment”. *American sociological review*, 45, 787-801.
- Snow, D. A. (1986). “Frame Alignment Processes Micromobilization, and Movement Participation”. *American Sociological Review*, 51(4), 464-481.
- Somma, N. (2015). “Protestas y conflictos en el Chile contemporáneo: quince tesis para la discusión”. *Nueva Gobernabilidad. Emergencia y gestión de conflictos, controversias y disyuntivas públicas en Chile*.
- Sotomayor, F. (2018). “Consideraciones sobre el proceso de modernización capitalista en Chile”. *Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales*, 88, 1-11.
- Tarrow, S. (1994). *Power in movement: Social movements, collective action and politics*. Cambridge: Cambridge University Press.



- Tilly, C. (1991). "Social Movements as Historically Specific Clusters of Political Performances". *Berkeley Journal of Sociology*, 7.
- Transparency International (2017). Ranking of Chile. Obtenido de <https://www.transparency.org/country/CHL>
- Valenzuela, S., y Arriagada, A. (2012). "The social media basis of youth protest behavior: The case of Chile". *Journal of Communication*, 62(2), 299-314.
- Ventura, M. F. (2007). "Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja". *Política y cultura*, 27, disponible en <http://ref.scielo.org/fwkqbb>
- Wahren, J. (2012). "Movimientos Sociales, y territorios en disputa: Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta", *Trabajo y sociedad*, 19, disponible en <http://ref.scielo.org/mdcrnn>

\* \* \*

**Francisco Iván Sotomayor López** es Trabajador Social, Licenciado en Trabajo Social (Universidad de Valparaíso, Chile), Magister en Psicología Social con mención en Intervención Psicosocial y Evaluación de Proyectos Sociales (Universidad Alberto Hurtado) y doctorando en Pensamiento Crítico Latinoamericano, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Docente e investigador de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso.